

Patrick Itschert

Redemocratizar la Unión Europea



El libro, 1924. Juan Gris.

2014 marcará el centenario del principio de la primera Guerra Mundial pero en mayo, con las elecciones parlamentarias europeas, los progresistas se enfrentarán a un auténtico desafío democrático. La Unión sigue siendo una construcción lejana y se percibe mal el papel del Parlamento, a lo que se añade la gestión ultraliberal de la crisis: austeridad ciega y competitividad a base de recortar salarios. En general, los ciudadanos tienen la impresión de pagar muy caro una crisis provocada por el mundo de las finanzas; algunos piensan además que se les obliga a acatar las exigencias de unos pocos, y otros que financian una solidaridad cuyo sentido no terminan de entender. Se han destruido 10 millones de empleos desde 2008 pero esta Comisión y este Consejo son incapaces de tomar las medidas sociales que se imponen. A todo esto hay que añadir el verdadero abismo democrático que se está abriendo entre el ciudadano y ciertas instituciones europeas: la "troika" constituye uno de los ejemplos más flagrantes de estas derivas. Corremos, pues, el riesgo de tener en mayo 2014 el Parlamento más euroescéptico o antieuropeo, y más "populista", de toda su historia. Las únicas soluciones pasan por cambiar de rumbo, reabrir paso a lo social y al empleo, redemocratizar la UE y devolver la palabra a los ciudadanos.

INTRODUCCIÓN

DURANTE décadas, la Unión Europea (UE) engendró progreso. Fue citada a menudo como ejemplo por sus “valores” —respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos— y por su “modelo social” —diálogo social, autonomía de los interlocutores sociales, solidaridad, protección social. Sin embargo, “este acervo” se encuentra ahora gravemente amenazado y debilitado. La UE se dobléga ante una austeridad ciega que ha llevado a recortar drásticamente el gasto público y a disparar el paro— el juvenil en particular (5,7 millones de menores de 25 años: un triste récord). La Unión está enferma por culpa de sus crecientes precariedades y desigualdades y por buscar la competitividad sólo a base de reducir salarios, empeorar las condiciones laborales, precarizar los contratos laborales, disminuir la protección social e implantar una fiscalidad injusta.

Algunos, en la Comisión, proclaman ahora que el crecimiento ya está “aquí”, “a la vuelta de la esquina” y que muchos Estados Miembros empezarán por fin a recuperarse en 2014. La realidad es que falta mucho todavía para que esta crisis termine y que es socialmente inaceptable no encararse de veras al drama de un paro masivo que afecta a 26,7 millones de ciudadanos. Y la verdad es que la UE no anticipó ni la profundidad de las mutaciones en curso, ni la aceleración de la globalización, ni la emergencia de nuevas potencias muy competitivas.

Cuando la crisis financiera estalló en 2008, la Unión no era consciente de la debilidad de sus bases, incapaz de tomar las decisiones que se imponían: “demasiado poco, demasiado tarde”. Recordemos que la crisis del euro —más allá de la deriva del mundo financiero— emana también de un vicio de construcción de la Unión. Poco a poco se ha ido despreciando la dimensión de la “profundización”, y la “ampliación” dejó paso a la creación de una amplia zona de libre intercambio sin protecciones sociales, políticas y económicas.

DÉFICIT DEMOCRÁTICO FLAGRANTE

Los acontecimientos de estos últimos años han puesto de relieve el enorme déficit democrático que se ha ido desarrollando. Desgraciadamente, el ciudadano ya desconocía demasiado Europa aunque hoy en día más del 60% de las disposiciones nacionales emana de decisiones europeas. En muchos países, sencillamente, los ciudadanos sólo pueden participar en esta construcción votando una vez cada cinco años, en unas elecciones donde suelen predominar los problemas nacionales o regionales. Las elecciones europeas reflejan, pues, opiniones nacionales sobre desafíos esencialmente locales. Demasiados ciudadanos de la UE no sabrían contestar a la pregunta: “¿Quién dirige la Unión?”.

La gestión de la crisis financiera, económica y luego social europea tan sólo ahondó este abismo. Varias medidas antidemocráticas e inadecuadas fueron imponiéndose desde 2008. No existe en la legislación europea ningún mandato a favor de la famosa “*troika*” (BCE-Comisión-FMI) —los “*men in black*”—. Entonces, ¿en nombre de quién y de qué algunos de sus expertos han escudriñado las legislaciones sociales de los Estados Miembros para sacar sistemáticamente de ellas las disposiciones “menos avanzadas” y “sugerir” al gobierno griego un “paquete de medidas” a modo de nuevo “*benchmark social*” a cambio, evidentemente, de la ayuda financiera necesaria? ¿Ante qué instancia deben responder y rendir cuentas? La adopción del tratado fiscal —que la CES rechazó— excluyó cualquier participación seria de los ciudadanos y del Parlamento europeo. ¿Y cómo es que un Comisario ha podido, decentemente, sugerir hace unas semanas a los interlocutores sociales españoles, que “redescubre” después de haberlos soberanamente ignorado durante cierto tiempo, la firma de un acuerdo colectivo que recorta de nuevo los salarios?

Por otra parte, el método intergubernamental —o más bien las decisiones de un puñado de líderes gubernamentales— se ha ido imponiendo poco a poco a las instituciones, ya que *esta* Comisión es demasiado tímida, por no decir que se autocensura.

Está claro que la evolución que denunciarnos no se hubiera producido sin la hipocresía de otros Jefes de Estado o de gobierno y de ministros que no asumen en su propio país las decisiones que, sin embargo, adoptan o aceptan a nivel europeo. Parafraseando a un ex-Presidente: si pierdo la negociación, la culpa será de “Bruselas y de sus burócratas”; si la gano, me atribuiré el correspondiente mérito a nivel nacional.

PRIMERAS RESPUESTAS: DESARROLLAR LO SOCIAL

Hoy en día se percibe más a la UE como parte del problema que como parte de la solución. Se aprecia prácticamente en cualquier lugar de Europa un recrudecimiento del voto populista. En este contexto, no ayuda para nada el hecho de que todo un Presidente de Comisión, en una cadena francesa, invite a la gente a “tener el valor de luchar contra el populismo” y de que, días después, vierta en el *Bild* alemán unos comentarios propios de un periódico sensacionalista, desacreditando a los trabajadores y trabajadoras del sector de la peluquería. En general, se infravalora mucho el riesgo de tener, en mayo 2014, el Parlamento más euroescéptico o anti-europeo, y más populista, de toda su historia, lo que sólo contribuirá a complicar todavía más la gestión de la Unión.

¿Una de las principales razones? A Europa le faltan iniciativas reales, concretas en el ámbito social. No hablamos, por supuesto, de “medidas de tres al cuarto” ni de efectos declarativos. El actual Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, reconocía hace unos meses haber sido impactado por la interpelación de una joven “indignada” española: “han inyectado —decía— cientos de miles de millones en la banca para salvarla, pero ¿qué han hecho para nosotros, los jóvenes?”.

En diciembre 2012, cuando se anunció que el Presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, había recibido el mandato de presentar propuestas sobre la dimensión social de la UEM (Unión Económica y Monetaria) a la cumbre de junio 2013, los interlocutores sindicales volvieron a tener ciertas esperanzas. Tuvimos la impresión de que la Comisión había entendido por fin que la política de austeridad ciega no llevaba a ningún lado y que la multiplicación de las reformas estructurales del mercado laboral no crearía los empleos tan necesarios. Esperábamos entonces que la Comisión adoptara nuestra propuesta de un amplio plan de inversión a favor del empleo a escala europea. Desgraciadamente, el elefante parió un ratón. La CES obtuvo algunos avances, es verdad, pero nada estructural sobre lo esencial: la creación de puestos de trabajo de calidad y sostenibles. El diario belga *Le Soir* comentó incluso la comunicación afirmando que contenía “una *novlengua* que indicaba la falta de política social”, en un momento en que la tasa de paro era alta, insoportable en algunos países, y más todavía tratándose de la juventud. Esta tasa roza el 60% en Grecia.

¿Cómo explicarles a los ciudadanos de la Unión que se les considera como europeos cuando se trata de reducir la deuda, de contener la inflación y de ajustar los presupuestos —con medidas vinculantes y punitivas— pero que vuelven a ser sim-

ples ciudadanos nacionales en cuanto se abordan temas de política social, de paro o de salud-seguridad-higiene?

Es prioritario, pues, ***cambiar de rumbo***, lanzar una auténtica batalla —con los recursos apropiados— contra el paro, llevar a cabo una auténtica política de recuperación y de crecimiento para el empleo. Es el “contrato social de la CES” que se ha detallado recientemente en lo que se refiere a su dimensión “plan de inversiones”.

REDEMOCRATIZAR LA UE

Después, es imprescindible restablecer la credibilidad y la legitimidad de las *instituciones* europeas ante los ciudadanos, reforzando su transparencia y profundizando en la democracia. El Tratado de Lisboa estipula que el Presidente de la Comisión será propuesto por los Estados Miembros en función de los resultados de las elecciones europeas, y que el Parlamento decidirá después. Por lo tanto, los candidatos designados por los partidos europeos tendrán, en consecuencia, que hacer campaña en toda la Unión presentando su programa. Esto debería constituir un paso adelante.

Reforzar aún más los poderes del *Parlamento Europeo* es coherente con el hecho de que en la mayor parte de los Estados Miembros el modelo democrático es parlamentario. Articular mejor las competencias del Parlamento europeo con las de los parlamentos nacionales incrementaría el control democrático de las decisiones políticas —otro de los temas que cabe situar en el centro del debate. Las tomas de decisión se diluyen hoy, con lo que no pueden identificarse las responsabilidades.

Las *tres instituciones europeas* deben reformarse para ponerse al servicio del modelo social y económico europeo, para que la construcción europea constituya de nuevo un proyecto de progreso social, solidario, democrático adaptado a un mundo globalizado.

Las nuevas disposiciones en materia de *gobernanza económica* europea prevén una participación de los interlocutores sociales, que no puede ser “simbólica”. Los interlocutores acaban de adoptar una Declaración conjunta, que no legitima para nada *esta* gobernanza actual contra la que la CES lucha —queremos una guber-

nanza para un crecimiento y unos empleos sostenibles. Pero esta declaración insiste en una mayor implicación de los interlocutores sociales europeos y nacionales en este proceso que tiene, evidentemente, repercusiones considerables en la Europa social. Esta implicación en la elaboración y aplicación de políticas que tienen un impacto directo o indirecto en los mercados laborales, es crucial. Sólo se podrá controlar mejor esta gobernanza si se incrementan la transparencia, la legitimidad y la responsabilidad.

La negociación colectiva y el diálogo social son parte integrante del modelo social europeo y deben garantizarse a nivel europeo y nacional. La principal razón de ser de la CES consiste en fomentar estos procesos para construir una Unión democrática y socialmente avanzada. Debe respetarse la *autonomía de los interlocutores sociales* a nivel europeo y nacional, así como su papel y su lugar. No pueden producirse, como ocurre en la actualidad, intervenciones unilaterales de los poderes públicos nacionales o europeos en las negociaciones colectivas o en los convenios colectivos existentes. Debe desarrollarse al máximo la cobertura de los trabajadores mediante la negociación pero, actualmente, *esta* Comisión y *este* Consejo favorecen la descentralización de las relaciones industriales, debilitando de paso el movimiento sindical. Hay que señalar la ambigüedad de los empresarios europeos, que se apresuran a reivindicar esta autonomía de los interlocutores sociales pero que se callan si les conviene cuando la *troika* interviene y desautoriza de hecho a sus propios miembros: *los interlocutores sociales deben llevar a cabo una auténtica reflexión en este campo.*

Tanto si se trata de economía como de finanzas, de temas sociales, de medioambiente o de inmigración... la mayor parte de los desafíos que afectan a los ciudadanos europeos ya son transnacionales. La *globalización* se acelera —es otro debate— y en muchos campos lleva a engaño pensar que será más fácil encontrar soluciones a nivel nacional. No obstante, la UE debe preocuparse en primer lugar por los auténticos problemas de sus ciudadanos, los que les afectan a diario, como el *dumping* social, las crecientes desigualdades, la precariedad galopante, la solidaridad o los derechos fundamentales y sindicales.

Habida cuenta de su peso económico, comercial y demográfico, la UE podría ser un protagonista clave en la *escena mundial*. El tratado de Lisboa estipula incluso que la Unión procurará promover sus valores en el resto del mundo (sin “paternalismo”). Pero, en aras de su credibilidad, la UE y sus Estados Miembros deben empezar por respetar escrupulosamente los instrumentos europeos e internacionales, como los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Para volver a lo más cercano a nosotros, *la redemocratización empieza en el lugar de trabajo*: los derechos de información, consulta y participación no pueden debilitarse; al contrario, deben mejorarse efectivamente, en particular en el caso de las reestructuraciones.

CONCLUSIONES

2014 marcará el centenario del principio de la primera Guerra Mundial. Pero ya no bastará, en las elecciones de mayo que viene, defender el acervo europeo relacionado con la paz. Las preocupaciones de los ciudadanos de los 28 Estados Miembros son muy concretas e inmediatas: el paro, la pobreza, los empleos precarios... Frente a estos desafíos, el ultraliberalismo de esta Comisión y de este Consejo engendra desafección, desilusión, vuelta al nacionalismo, al populismo. El Parlamento Europeo corre, pues, el riesgo de vivir un auténtico seísmo. Sólo hay una solución: un cambio de rumbo, una Unión más social y solidaria. Existen alternativas a las políticas actuales, y nos toca a nosotros hacerlas posibles.